

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL
Medellín, treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTE	: SILVIA ELENA SALDARRIAGA LONDOÑO
DEMANDADO	: ÚNICO INTERIOR SAS Y ANDRÉS DELGADO GONZÁLEZ
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO (AUTO)
RADICADO NACIONAL	: 05-360-31-05-001-2019-00136-01
RADICADO INTERNO	: 061-23
DECISIÓN	: CONFIRMA AUTO
ACTA NÚMERO	: 086

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a resolver el recurso dentro del auto de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, la providencia en segunda instancia se profiere escrita.

ANTECEDENTES

Las pretensiones de la demanda dirigen a que se DECLARE que el contrato realidad celebrado por las partes, siempre fue y ha sido de carácter laboral; que fue terminado en forma provocada, injusta e ilegal, por la renuncia que debió presentar la demandante.

En consecuencia, se CONDENE a la sociedad demandada al pago de la jubilación – sanción por haber eludido el contrato de trabajo simulando relaciones laborales de tipo civil y comercial y por haber provocado con esa conducta, la terminación del contrato laboral – contrato realidad, durante toda la época de prestación de servicios; el pago de aportes a la seguridad social (brazos caídos), indemnización por no pago de seguridad social en los términos

de la Ley 100 de 1993; se condene al pago de auxilio de cesantía, primas de servicios, vacaciones, dominicales y festivos correspondientes a los 3 últimos años; por no haber cumplido con el pago de la seguridad social, vincule y pague a Colpensiones los elementos a que haya lugar en calidad de empleador y las sumas pagadas por la parte actora se contabilicen como pago o abono a sus aportes; al 6% de las ventas por haberse establecido en el contrato; y las costas procesales.

Por medio de auto del 12 de mayo de 2022 se requirió a los demandados un término de 5 días para subsanar la contestación de la demanda, a efectos de que “1. Indicaré al dar respuesta al hecho primero (1º) cuál fue la fecha de inicio de la relación contractual de agencia comercial cuya terminación aduce fue objeto de transacción en acta del 24 de mayo de 2008; 2. Señalaré en el capítulo de notificaciones, el correo electrónico del codemandado ANDRÉS DELGADO GONZÁLEZ, pues omite hacerlo; 3. Allegaré constancia de remisión del poder conferido por el señor ANDRÉS DELGADO GONZÁLEZ, desde la dirección de correo electrónica que se informe por este para recibir notificaciones judiciales, según se solicita en el numeral anterior” y señaló que previo a estudiar la demanda de reconvención presentada por el Sr. Andrés Delgado González, debía acreditar el envío del poder conferido por este, desde el correo electrónico informado por él en la demanda de reconvención para efectos de notificación judicial, que es desde gerencia@mundounico.com.co, dado que el poder allegado al Despacho se recibió del correo andresdelgadogonzales@gmail.com. (expediente digital 26).

En el expediente digital 27, reposa memorial que subsana requisitos, en donde se señala que adjunta correo electrónico mediante el cual el codemandado y demandante en reconvención, Sr. Andrés Delgado González, remite nuevamente los poderes otorgados para su representación en ambas acciones. Y en el expediente digital 28, reposa memorial por medio del cual se subsanaba la contestación de la demanda, relativa al hecho 1º; y adicionó el capítulo de notificaciones para cumplir con el requerimiento 2º.

En auto del 16 de junio de 2022, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Itagüí se dio por contestada la demanda. En lo que respecta a la demanda de reconvención presentada por el Sr. Andrés Delgado González, señaló que en la

misma se dirige a que se declare que la Sra. Silvia Elena Saldarriaga Londoño demandó al Sr. Andrés Delgado González, para que fuera condenado solidariamente a obligaciones inexistentes y ajenas a él; la Sr. Andrés Delgado González formuló imputación de fraude en contra del Sr. Andrés Delgado González, la cual es temeraria y falsa; y fruto de la indebida vinculación y las falsas acusaciones, el Sr. Andrés Delgado González recibió perjuicio materiales y morales. Como consecuencia de ello, solicitó se condene a la Sra. Silvia Elena Saldarriaga Londoño a indemnizar al Sr. Andrés Delgado González por los perjuicios sufridos y a pagar las cosas y agencias en derecho de esa demanda.

Dicha demanda de reconvención que fue rechazada por el Juzgado, argumentando que si bien, la parte demandada puede proponer demanda de reconvención, ello se hace siempre que el Juez sea competente para conocer de ella o sea admisible la prorroga de la jurisdicción, y dicha demanda debe contener los mismos requisitos de la demanda principal. Sin embargo se consideró que el art. 2º del CPT y SS establece la competencia general de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y las pretensiones de la demanda de reconvención no se encuentra enmarcado en lo dispuesto en dicha normatividad, porque el conflicto jurídico no se origina directa o indirectamente en un contrato laboral porque lo solicitado es el resarcimiento de perjuicios causados al Sr. Andrés Delgado González ante la imputación de fraude y falsas acusaciones en su contra (expediente digital 29).

IMPUGNACIÓN

Inconforme con la decisión adoptada, el apoderado del Sr. Andrés Delgado González, interpuso recurso de apelación, solicitando se revoque la decisión adoptada, al manifestar que, de la lectura de los hechos, es forzoso concluir que el ámbito que enmarca su historia conlleva sólo efectos que, con base en la competencia de la jurisdicción ordinaria laboral pueden ser conocidos. Retoma lo señalado en el numeral 1º del art. 2º del CPT y SS para aducir, que la demanda y de las dos contestaciones, están cimentadas sobre la supuesta existencia de un contrato realidad laboral para la parte actora y la inexistencia del pretendido contrato y cualquier otra modalidad de relación laboral para la parte accionada; que el pretendido contrato realidad vinculante, en las condiciones que se afirman por la parte demandante pero que en contraposición

se objetan por la parte pasiva, no excluye que sobre la misma línea de su lectura y comprensión se aborde el estudio de la demanda de reconvención, al nacer los perjuicios que se pretenden, en una causa que tiene como origen directo o indirecto la existencia o inexistencia de un contrato laboral que vincula al Sr. Andrés Delgado González como persona natural y comprometer su responsabilidad en el pago de condenas en condición de empleador; el art. 75 ibidem, faculta al demandado a proponer la reconvención, siempre que el Juez sea competente para conocer de esta demanda o sea admisible la prórroga de jurisdicción, hipótesis que se presenta en este evento porque el origen de los perjuicios invocados no es otro distinto a la pretensión de la Sra. Silvia Elena Saldarriaga Londoño de adjudicarle la condición de empleador en la supuesta relación laboral que refiere en su demanda.

Considera que la decisión adoptada en primera instancia, desconoce el art. 2º del CPT y SS y conduce a no concluir la necesidad sustancial y procesal de conocer la demanda de reconvención violentando: el principio de igualdad, pues admite la demanda sobre el presupuesto de un pretendido contrato laboral, pero desconoce ese origen cuando sirve de sustento para la demanda de reconvención; se violenta la esencia y definición de la demanda de reconvención, la cual no se limita a oponerse a lo pretendido por el actor, sino que formula contra este una nueva pretensión, siendo esa la actuación desplegada por el Sr. Andrés Delgado González quien sufre perjuicios que deben ser resueltos en el mismo trámite procesal; quebranta el art. 11 del CGP; remitir y posponer el reconocimiento de los derechos del Sr. Andrés Delgado González a la necesidad de adelantar otro proceso diferente en una jurisdicción distinta; y reitera que los perjuicios solicitados, tienen origen en la misma fuente laboral que la demandante adjudica a todas sus pretensiones, nacen de los hechos narrados por la demandante, siendo ella quien cita el fraude en el hecho 13; adicionalmente, se rompe el equilibrio procesal el admitir el origen laboral del conflicto para identificar la competencia de las peticiones de la actora pero lo desatiende para desconocer la misma competencia sobre las pretensiones de la demanda de reconvención., sin que se pueda definir la existencia o no de los daños y perjuicios, después del proceso, sino que es durante el trámite del proceso ordinario laboral que se adelanta; y advierte que el resarcimiento de daños y perjuicios no provienen de las imputaciones que por fraude y malas imputaciones hace la demandante la actora al Sr. Andrés Delgado González,

sino que proviene de las afirmaciones introducidas en los hechos de la demanda; la decisión de primera instancia, adicional a desatenderse las normas sustantivas y procesales, viola el derecho de igualdad del demandante y el debido proceso.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El apoderado de la parte demandante solicita sea confirmada la decisión de primera instancia porque la justicia ordinaria tiene competencia para conocer exclusivamente las reclamaciones con fundamento en el contrato de trabajo o el trabajo de prestaciones derivado de prestaciones de servicios procesionales y la parte demandada presenta una petición improcedente; cualquier responsabilidad civil, penal, etc, se debe resolver en una jurisdicción diferente.

El apoderado del Sr. Andrés Delgado González solicita la revocatoria de la decisión adoptada, manifestando que la competencia se presenta, del debate que origina la demanda de reconvención, ello es, de la pretensión de existencia de un contrato de trabajo pues como se expuso, las posiciones procesales se nutren, de la supuesta existencia de un contrato realidad laboral para la actora y, de la inexistencia de cualquier contrato laboral para la parte demandada, contextos que posibilitaron proponer en ejercicio del derecho de contradicción y la demanda de reconvención, mediante la cual se pretende el reconocimiento y pago de los daños y perjuicios ocasionados ya que ambas posiciones giran alrededor de la definición judicial sobre la existencia o no de un contrato de trabajo. Asegura que, al poder ratificar que el proceso laboral vinculante de las partes actora y accionada, es consecuencia directa, no indirecta, del debate procesal cuyo centro es la *“existencia o inexistencia de un contrato laboral que vincule al señor Andrés Delgado González como persona natural y comprometer su responsabilidad en el pago de condenas en la pretendida condición de empleador”* y, que, *“el origen de los perjuicios del señor Andrés Delgado González no es otro distinto a la pretensión de la señora Saldarriaga Londoño de adjudicarle la condición de empleador en la supuesta relación laboral que refiere en su demanda”*, como se expresó en el memorial del 28 de junio de 2022, lo que hace que no haya duda que existe un debate procesal que va de la mano con la jurisdicción laboral, porque la parte demandante así lo circunscribe y relata en los hechos y pretensiones, se declare la existencia de

un contrato de trabajo, siendo la causa específica de la demanda de reconvención el efecto nocivo en la persona y en el patrimonio del Sr. Andrés Delgado González.

El tránsito de un proceso de la jurisdicción laboral a la civil o de la civil a la laboral, no lo determina la pretensión indemnizatoria que por daños y perjuicios se proponga con la demanda de reconvención; considera desacertada la decisión tomada porque no se analiza cuál es la causa de su potencial reconocimiento y pago, y pasa por alto, que la solicitada condena y pago, gira alrededor de un contrato de trabajo para la accionante Silvia Elena Saldarriaga Londoño y por la inexistencia del contrato de trabajo para el Sr. Andrés Delgado González, asuntos de conocimiento de la jurisdicción ordinaria laboral.

Frente a la clausula general o residual de competencia de la jurisdicción civil, consagrada en el art. 15 del CGP, considera que, si el conflicto jurídico se origina directa o indirectamente en un contrato de trabajo, y con esto se está atribuyendo a la jurisdicción ordinaria laboral su conocimiento, no sería aplicable el artículo 15 del CGP porque la competencia ya fue expresamente atribuida a otra jurisdicción.

En relación a la congruencia, reitera que, es la pretensión de declarar la existencia del contrato laboral, al que sin fundamento alguno, la accionante vincula al Sr. Andrés Delgado González como posible empleador y responsable solidario de las condenas, el origen directo de la inconformidad y la solicitud de indemnización de los perjuicios que sustenta la demanda de reconvención; la decisión impugnada implicaría, que el Sr. Andrés Delgado González tendría que esperar la sentencia ejecutoriada laboral para poder acudir a la presentación de una demanda civil, lo cual vulnera los principios de economía procesal, celeridad y debido proceso. Resalta la vulneración de la efectividad de los derechos, el debido proceso y el derecho de igualdad real de las partes. Y trae a colación el auto No. 264 de 20212 de la Corte Constitucional que hace referencia a un posible conflicto de competencias entre la jurisdicción ordinaria laboral y la administrativa.

PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico a resolver se centra en determinar si hay lugar admitir la demanda de reconvención elevada por el Sr. Andrés Delgado González en contra de la Sra. Silvia Elena Saldarriaga Londoño.

Visto lo anterior, al remitirnos a la demanda presentada por la Sra. Silvia Elena Saldarriaga Londoño en contra de la sociedad Único Interior SAS y del Sr. Andrés Delgado González, se encuentra que las pretensiones se dirigen a que se declare la existencia de un contrato realidad celebrado por las partes el cual siempre tuvo carácter laboral; que el contrato fue terminado en forma provocada, injusta e ilegal, por la renuncia que debió presentar la demandante; se condene a la sociedad demandada al pago de la jubilación – sanción por haber eludido el contrato de trabajo simulando relaciones laborales de tipo civil y comercial y por haber provocado con esa conducta, la terminación del contrato laboral – contrato realidad, durante toda la época de prestación de servicios; el pago de aportes a la seguridad social, indemnización por no pago de seguridad social en los términos de la Ley 100 de 1993; al pago de auxilio de cesantía, primas de servicios, vacaciones, dominicales y festivos correspondientes a los 3 últimos años; al pago de la seguridad social en pensiones; al 6% de las ventas por haberse establecido en el contrato; y las costas procesales.

Como hechos en que sustentó las pretensiones la parte actora, indicó que fue vinculada al departamento de ventas en la sociedad Único Interior SAS, el 1º de enero de 1998 para el departamento de Antioquia y los municipios de Quibdó, Leticia y La Dorada, y posteriormente se le entregó para firmar un contrato denominado “Contrato de Agencia para personas naturales”; el contrato inicial se hizo verbal y se pactó como remuneración, el 6% anual sobre las ventas; la labor desempeñada, era la venta de los productos en la línea de vestidos para caballero, conseguir clientes, recibir pedidos, seleccionar los compradores, informar sobre las ventajas del producto en relación con otros similares en el país, recaudar cartera y en oportunidades, debía acompañar los pedidos y su empaque; la empresa le notificó a la demandante desde un inicio que su relación era Agencia para personas naturales, el cual corresponde en la práctica a un contrato comercial; la demandada le pagó a la demandante las cesantías comerciales que corresponden al pago adicional de las comisiones devengadas

durante un mes; la accionada nunca realizó aportes a la seguridad social en pensiones y riesgos laborales, lo cual debió realizar la demandante; la accionada suprimió las zonas de Quibdó, Leticia y La Dorada; la demandante debía estar pendiente de las ordenes e instrucciones de la empresa; la dependencia laboral se demuestran con las ordenes y circulares escritas que le enviaban.

El 14 de mayo de 2017 la demandada hizo firmar un escrito de terminación del contrato de servicios comerciales y firmar uno nuevo, de carácter laboral, en la cual cambiaron su remuneración y se redujo en una tercera parte de los valores que recibía; ante esa situación y la desatención a las reclamaciones, la parte demandante presentó renuncia a su cargo el 17 de abril de 2018, razón por lo que recibió el pago de las prestaciones sociales; el contrato celebrado por las partes siempre fue un contrato de trabajo; esa relación laboral se terminó al rebajar los salarios y comisiones recibidos por la demandante en más de las 2/3 partes; por haber trabajado la demandante mas de 20 años, tiene derecho a la jubilación -sanción. Y en los hechos 12 y 13 de la demanda, en forma expresa manifestó: “12. El gerente de la empresa y representante legal de la misma, el señor Andrés Delgado González fue autor directo en los diferentes cambios de la sociedad, de Sociedad Únicopersonal a SAS y también fue quien impuso la modalidad de contratos civiles y comerciales, desconociendo el contrato realidad-contrato de trabajo – contrato protegido por nuestra constitución desde el preámbulo, y en los artículos 53,77 y concordantes. 13. La conducta del gerente y socio de la empresa, le genera una responsabilidad personal, tal como lo ha venido sosteniendo la Corte Constitucional en sentencia C 865 de 2004..., por el fraude cometido en contra de la parte actora. (...)”.

Por su parte, en la **demanda de reconvención** presentada por el Sr. Andrés Delgado González en contra de la Sra. Silvia Elena Saldarriaga Londoño, solicita se declare que la Sra. Silvia Elena Saldarriaga Londoño mediante relación de hechos de cuya falacia era conocedora, demandó al Sr. Andrés Delgado González para que se le condenara solidariamente al pago de obligaciones inexistentes y definitivamente ajenas a mi Representado; la Sra. Silvia Elena Saldarriaga Londoño formuló imputación de fraude en contra del Sr. Andrés Delgado González, imputación temeraria y falsa; fruto de la indebida vinculación a la demanda instaurada y de las falsas acusaciones realizadas en

su contra por la Sra. Silvia Elena Saldarriaga Londoño, el Sr. Andrés Delgado González ha recibido perjuicios materiales y morales que deben ser indemnizados por la primera. En consecuencia, solicita se condene a la Sra. Silvia Elena Saldarriaga Londoño a indemnizar al señor ANDRÉS DELGADO GONZÁLEZ por todos los perjuicios sufridos y que se establezcan en el debate probatorio del presente proceso; y al pago de costas procesales.

Sustentó sus pretensiones en que, las pretensiones de la demanda presentada por la Sra. Silvia Elena Saldarriaga Londoño en contra de la sociedad Único Interior SAS y del Sr. Andrés Delgado González; la Sra. Silvia Elena Saldarriaga Londoño pretende fundar sus peticiones en contratos de agencia comercial celebrados por Único Interior SAS, el primero de ellos en el mes de octubre del año 2002 con la Agente Comercial Silvia Elena Saldarriaga Londoño y el segundo con la persona Jurídica SILVIASAL EU el 24 de mayo de 2008; el Sr. Andrés Delgado González está vinculado mediante contrato de trabajo a la sociedad Único Interior SAS, desde el 1° de junio de 2016 y fue designado Representante Legal por la Junta Directiva de la Sociedad el 14 de diciembre de 2016; las afirmaciones en las que relaciona la vinculación pretendida del Sr. Andrés Delgado González con las pretensiones de la demanda se aprecian en los hechos 12 y 13 de la demanda presentada por la Sr. Andrés Delgado González, de las cuales no se aporta pruebas y las considera afirmaciones temerarias y desprovistas de la realidad y las acompaña con una grave imputación al Sr. Andrés Delgado González, de haber incurrido en hecho fraudulento, hechos y fraude que no existieron; y aseguró que la imputación temeraria que hizo la Sra. Silvia Elena Saldarriaga Londoño de un fraude realizado por el Sr. Andrés Delgado González, más la demanda infundada con la que le vincula, han generado la inversión de tiempos incluso de descanso para la atención de esta infortunada contingencia, la ansiedad y la preocupación, por sentirse acusado de un delito ante un Juez y la perturbación de su tranquilidad personal y familiar fuertemente violentadas por cuenta de las falsas imputaciones, además de la inversión en asesoría y atención de estos asuntos para él graves y mortificantes.

Sea lo primero decir, que el art. 371 del CGP establece frente a la demanda de reconvencción que:

“Durante el término del traslado de la demanda, el demandado podrá proponer la de reconvención contra el demandante si de formularse en proceso separado procedería la acumulación, **siempre que sea de competencia del mismo juez y no esté sometida a trámite especial**. Sin embargo, se podrá reconvenir sin consideración a la cuantía y al factor territorial. (...)” (Resalto fuera del texto)

El doctrinante Hernán Fabio López Blanco al respecto ha indicado:

“La demanda de reconvención, prevista para los procesos declarativos en el art. 371 del CGP que regula los pasos del proceso verbal para que pueda darse necesita los siguientes requisitos:

- 1.- Que el juez sea competente para conocer de todas las pretensiones.
- 2.- Que éstas sean susceptibles del mismo trámite.
- 3.- Que exista relación entre las pretensiones o hechos de la demanda inicial y entre las pretensiones o hechos de la demanda de reconvención, por cuanto como lo indica Devis, “entre las pretensiones de la reconvención y la demanda inicial **debe existir alguna conexión o afinidad**, aunque no es necesario que se origine en el mismo título que le sirve de causa petendi. Desde que las pretensiones del demandando se relacionen con los hechos que sustentan la relación jurídica llevada al debate por el demandante, es pertinente la reconvención, como cuando se demanda para la entrega de una cosa y se reconviene para el pago de los gastos de conservación. Con mayor razón es admisible la reconvención cuando ambas pretensiones provienen de un mismo título, como si se reconviene al comprador que demanda la entrega de la cosa para el pago de su precio o para la resolución del contrato”.

Este tercer requisito (esto es, **la relación o afinidad que debe existir entre las pretensiones y los hechos de las dos demandas**), es a todas luces el más importante de cuantos debe analizar el juez, pues carece de objeto adelantar en forma acumulada dos acciones que no guardan en lo que a sus pretensiones y hechos se refiere, ninguna vinculación, pues tal proceso traería confusión en el análisis de los hechos y las pruebas.” (Texto Código General del Proceso – Parte General-, pag. 594, año 2016) (Resalto de la Sala)

Luego de realizar el análisis de las pretensiones y hechos de la demanda ordinaria laboral presentada por la Sra. Silvia Elena Saldarriaga Londoño y las pretensiones y hechos que sustentan la demanda de reconvención presentada por el Sr. Andrés Delgado González, considera la Sala que se deberá CONFIRMAR la providencia de primera instancia, bajo el entendido que no existe afinidad entre las pretensiones y hechos de las demandas, pues si bien es cierto, la pretensión de la demanda ordinaria laboral se dirige a la declaración de la existencia de un **contrato realidad** y el consecuente pago de prestaciones sociales, vacaciones, aportes a la seguridad social y pago de

pensión sanción, dichas pretensiones no guardan conexidad o afinidad con la solicitud de pago de los perjuicios invocadas por el Sr. Andrés Delgado González, en vista que los perjuicios se sustentan en las afirmaciones hechas por la demandante al momento de justificar las razones por las cuales demandaba al Sr. Andrés Delgado González.

Y es que no por un demandante o demandado afirmar cualquier situación en una demanda laboral, llámese igualmente reconvención, sólo por ello se adquiere competencia del juez laboral para conocer de lo señalado, como en el caso que no ocupa, que se refieren los hechos del libelo a situación fraudulentas, que son del resorte del derecho penal y en caso de la reconvención perjuicios de tipo civil o derivados de la acción civil de un proceso penal.

La competencia del juez laboral en este caso se presentan conforme las pretensiones, por la existencia o no de un contrato realidad celebrado por las partes, la indemnización por despido injusto, una pensión sanción entre otras. Debiéndose determinar en primera instancia quien fue el verdadero empleador.

En ese sentido, en caso de considerar el Sr. Andrés Delgado González que tiene derecho al pago de perjuicios por parte de la Sra. Silvia Elena Saldarriaga Londoño deberá acudir a otro proceso judicial (que considere pertinente) a efectos de demostrarlo, pues como ya se indicó, al no tratarse de una pretensión afín a las pretensiones de la demanda ordinaria laboral, la justicia ordinaria laboral no es competente para su conocimiento, en aplicación del art. 2º del CPT y SS.

En consecuencia, considera la Sala que se deberá CONFIRMAR la decisión de primera instancia.

Sin costas en esta instancia.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión emitida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Itagüí, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDA: Sin costas en esta instancia.

TERCERO: Déjese copia de lo resuelto en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de procedencia.

Lo resuelto se notificará por ESTADOS.

Los Magistrados.



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
- SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N ° 056 del 31 de marzo de 2023

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>